

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA Y AL ESTATUTO DE GOBIERNO DE LA UAN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN Y FACULTADES DE ÁREAS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS.

Raúl Alamillo Gutiérrez
Programa Académico de Filosofía
raul.alamo@uan.edu.mx

El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica (*en adelante* LOUAN), y por tanto al Estatuto de Gobierno (*en adelante* EGUAN) de la Universidad Autónoma de Nayarit (*en adelante* UAN) para efectos de que se reconozca plenamente la personalidad jurídica de las Áreas y Programas Académicos de la UAN en el Consejo General Universitario (*en adelante* CGU), así como en en la estructura general de la misma universidad. Este trabajo parte de la premisa de que dicha falta de representación vulnera un núcleo de derechos humanos relacionados de forma interdependiente con el derecho fundamental a la educación. Asimismo, se sostiene que tal estado de cosas violenta la garantía constitucional de la autonomía universitaria al irrespetar el propio orden constitucional e incumplir los fines de la universidad en cuanto que institución educativa¹. La base bibliográfica del presente documento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (*en adelante* CPEUM), en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en los textos normativos universitarios antes referidos y en el texto *Tópicos de Derecho Universitario*, editado por la UNAM en 2010.

Las universidades públicas son entidades jurídico-sociales de una enorme complejidad, debido a una serie de factores, tales como la pluralidad de ideas sobre lo social, lo económico, lo político, lo educativo. Tampoco podemos desconocer la compleja relación entre sindicatos y la propia institución, así como los retos que día a día representa la gestión académica y administrativa de miles de docentes y estudiantes. Si a ello añadimos la creciente exigencia de la sociedad civil a las universidades para que éstas ofrezcan respuestas a los graves problemas sociales que vive nuestro país, y para que todo su actuar sea realizado bajo los más altos estándares de transparencia, podemos asumir que no es

¹ La CPEUM plantea en su artículo 3º fracción VII que “Las universidades (...) realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura (...) respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”. Por su parte, la LOUAN establece en su artículo 6º que “La Universidad Autónoma de Nayarit tiene por objeto:

I. Impartir educación media superior y superior en los diversos niveles y modalidades;
II. Fomentar, organizar y realizar investigación científica;
III. Propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas estatales regionales y nacionales;
IV. Coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y difusión de la cultura, extendiendo sus beneficios a toda la sociedad.”

exagerada la afirmación de que la universidad pública es en sí misma un microcosmos de la vida social del país.

Dicho lo anterior, una respuesta políticamente correcta a tales desafíos consistiría en afirmar que tal complejidad de la vida universitaria se puede procesar institucionalmente porque existe en la UAN un avanzado entramado normativo e institucional que permite dar respuesta y solución a los conflictos que se generan al seno de la universidad. Sin embargo, hechos concretos como los que acaban de suceder en los meses pasados, hacen evidente que existe una diversidad de espacios y lagunas normativas e institucionales, que impiden a la UAN cumplir con sus fines, y que hoy se nos presentan en este espacio, como una enorme área de oportunidad, en el camino hacia la construcción de una universidad que asume para sí los principios y valores de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Es en este punto en el que quiero realizar una propuesta, misma que considero tiene un carácter de necesaria y urgente resolución, y que va encaminada a materializar lo que Luis Raúl González Pérez, y Enrique Guadarrama López llaman *el Estado de Derecho Universitario*, para reflejar la trascendencia de la obligación de la universidad de respetar el orden jurídico contenido en nuestra Norma Fundamental, que es la Constitución Federal.²

Al realizar un acercamiento analítico-jurídico a la LOUAN, máxima referencia normativa a nivel interno, así como al Estatuto de Gobierno, encuentro serias y graves deficiencias democráticas, todas subsanables, a saber:

1.-En el artículo 10 de la LOUAN se establece que

Para cumplir con sus fines y funciones, la estructura académica y administrativa de la Universidad se sustenta en **unidades académicas** organizadas por áreas del conocimiento.

2.-En el artículo 13 de dicho cuerpo normativo, se afirma que

II. Son autoridades unitarias:

- a) El Rector;
- b) Los funcionarios de la administración general de la Universidad;
- c) Los **directores de las unidades académicas**.³

²Cfr. González Pérez, Luis Raúl y Guadarrama López Enrique, *Tópicos de Derecho Universitario*, México: UNAM, 2010, p. 23

³ Énfasis añadido propio.

3.- En el artículo 14 se lee:

1. El Consejo General Universitario **es el órgano superior de gobierno, y sus resoluciones son obligatorias**; funcionará en sesiones plenarias o en comisiones para el estudio y resolución de los asuntos de su competencia, así como para el logro de los objetivos universitarios a que se refiere esta ley.

2. El Consejo General **se integra por los siguientes consejeros con derecho a voz y voto**:

a) **El Rector**, quien fungirá como presidente y tendrá voto de calidad siempre que el empate persista después de una segunda ronda de votación;

b) **El Secretario General**, quien fungirá como secretario del Consejo;

c) **Tres titulares del secretariado** universitario que designe el Rector;

d) **Dos representantes** del personal académico **de cada una de las unidades académicas, siendo uno de ellos el director** de la unidad académica de referencia;

e) **Dos representantes de los alumnos** de **cada una de las unidades académicas**, en su caso, siendo uno de ellos el presidente del comité estudiantil de la unidad correspondiente;

f) **Tres representantes de la organización sindical de personal académico** que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo;

g) **Tres representantes del organismo estudiantil de la Universidad que agrupe a la mayoría de la población** escolar de la institución; y

h) **Tres representantes del organismo sindical de trabajadores administrativos y manuales** que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Tal estado de cosas se ratifica en el EGUAN, ya que mientras que, el artículo 6º establece que “El **Área Académica** constituye el núcleo de las actividades académicas de la Universidad, es un espacio (...) **donde se integran las unidades académicas y los programas académicos** de docencia (...), y el siguiente artículo establece las **Áreas Académicas de la UAN, en la que deberían subsumirse todas las unidades y programas académicos**, el artículo 8º, habla sólo de las unidades académicas como entes académicos y administrativos, constituidos por órganos y autoridades.

De lo anterior se desprende que ni los Coordinadores de Área Académica ni los Coordinadores de los respectivos Programas Académicos de dichos Áreas, ni los alumnos, que las integran tienen representación formal en el Consejo General Universitario, lo que genera que, en el caso del ÁCSyH, contemos con un consejero que, por una concesión gratuita del propio CGU, asista con derecho a voz, pero no a voto. Queda bastante claro que mientras que por un lado son reconocidas en la propia LOUAN la existencia de Áreas y

Programas Académicos, a la vez son excluidos absolutamente del órgano colegiado máximo universitario, que es donde se producen lo que los autores antes citados llaman los cuatro tipo de decisiones jurídico-políticas fundamentales en las que se despliega el principio constitucional de autonomía universitaria, como son las decisiones en materia de *autogobierno*, *de autodeterminación académica*, *de autonormación*, *de autogestión administrativa-presupuestal* y de *autotutela*. Tal estado de cosas permite establecer que, en el caso del ÁCSyH, un universo de 191 docentes y 1870 estudiantes **no contar con representación plena** en el CGU, **están impedidos de participar en la conformación de la voluntad universitaria** que se materializa en su máximo órgano de gobierno antes referido, y cuyas decisiones se imponen con carácter de obligatoriedad sin la participación deliberativa suficiente ni el voto de los docentes y estudiantes de dicho Área Académica, lo que hace presumir un estado de cosas inconstitucional que vulnera sistemáticamente un núcleo de derechos humanos interdependientes del derecho humano a la educación, tales como el derecho a la igualdad o a no ser discriminado por razones de ningún tipo, además de que se viola el principio de autonomía universitaria.⁴

Es por lo anterior que para evitar esta situación de relaciones jurídicas desiguales, se propone, vía reformas a la LOUAN y al EGUAN:

- 1) Se reconozca plenamente la personalidad jurídica de las Áreas y Programas Académicos, de tal manera que sean tratados en condiciones de igualdad respecto de las Unidades Académicas, de modo que cada Coordinador de Área se constituya como consejero con derecho a voz y voto en el CGU, y que cada Programa Académico, incluidos los de Posgrado, cuente con dos representantes con representación plena (voz y voto), como es el caso de las citadas Unidades Académicas, o que en todo caso se le otorgue al ÁCSyH una representación plena en el CGU de al menos cuatro representantes, el Coordinador incluido. Huelga decir, que bajo un elemental argumento interpretativo, no es justificable

⁴ Al respecto, es ilustrativa el siguiente criterio jurisprudencial:

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado.

Novena Época, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/2002 Página: 576.

racionalmente que, mientras que , por ejemplo cada Preparatoria de la UAN tiene el tratamiento de Unidad Académica para efectos de representación en el multicitado CGU, las Áreas Académicas se vean privadas de dicha representación, sin mayor razón que la inexplicable inacción del propio CGU para transformar tal situación que, como ya se ha apuntado, vulnera derechos humanos y entorpece los fines de nuestra propia universidad. En esta propuesta, se plantea que a los Coordinadores de Área Académica se les otorguen cuando menos, las facultades y atribuciones de un director de Unidad Académica⁵, con independencia de que conserven sus competencias en cuanto que autoridad de gestión, esto último, para efectos de coordinación de las actividades de los Programas Académicos del Área Académica de que se trate.

- 2) Otra propuesta que no requeriría una reforma a la LOUAN (por tanto, dependería del CGU y no del Congreso local), consiste en desaparecer el ÁCSyH y crear cuatro Unidades Académicas con los Programas Académicos y los posgrados que hoy la integran (excepto la UA de Derecho), con las competencias y facultades que tienen hoy las Unidades Académicas.

Concluyo expresando mis sinceros deseos de que como universitarios, por el bien de nuestra institución, atendamos con seriedad las propuestas que se han vertido en estas mesas de trabajo, de modo que no se tenga que apelar a una autoridad externa para que se pronuncie al respecto. Las experiencias de una resolución dada por un tercero externo, si bien son legítimas en un Estado de Derecho, no resuelven las naturales tensiones que surgen ante conflictos en comunidades tan complejas como las universidades públicas. Desde ya, pongo toda mi esperanza y mi empeño en este proceso de transformación de nuestra universidad, y me pongo sus órdenes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit

Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit

González Pérez, Luis Raúl y Guadarrama López Enrique, ***Tópicos de Derecho Universitario***, México: UNAM, ,2010.

⁵Cfr. Art. 59 del EGUAN